

SE RESUELVE:

Las playas adyacentes a los terrenos de "Paitilla" y "El Codo," comprendidas entre la Punta de Paitilla y Panamá La Vieja, no pertenecen al Municipio de Panamá, sino que son bienes nacionales del dominio público, y, de consiguiente, es la Nación la que puede gravar con impuestos la extracción de arenas de las playas mencionadas.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 120

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 120.—Panamá, 1o. de Julio de 1926.

El señor Secretario de Agricultura y Obras Públicas, en oficio número 330 del 30 de Junio último dirigido a este Despacho, manifiesta lo siguiente:

"Para poder llevar a cabo la mencionada obra, (corte del canal del Río Grande, en la Provincia de Coclé), es preciso atravesar por terrenos de propiedad de los señores Alfredo Arango y Rodolfo Suárez; la propiedad de este último señor es preciso atravesarla en dos partes. Las fajas que hay que tomar de cada una de las fincas, para el canal propiamente dicho son como sigue: Corte de arriba: Terreno de Alfredo Arango, 2100 metros cuadrados. Terrenos de Rodolfo Suárez, 3500 metros cuadrados. Corte de abajo: Terrenos de Rodolfo Suárez, 4300 metros cuadrados. Total que se toma de Rodolfo Suárez, 7800 metros cuadrados. Al construir el canal habrá porciones de propiedades, formando unas especies de islas cuyas áreas son como sigue: Alfredo Arango, 1 hectárea 5840 metros cuadrados. Rodolfo Suárez, arriba, 5 hectáreas 8600 metros cuadrados. Rodolfo Suárez, abajo 7 hectáreas 900 metros cuadrados, Total que se agrega de los dos potreros de Suárez, 12 hectáreas 9500 metros cuadrados."

La obra de que se trata tiene por objeto evitar inundaciones ruinosas en las tierras vecinas a la corriente de agua nombrada e impedir que una desviación muy probable de la misma inutilice Puerto Posada y Puerto de Aguadulce. Los propietarios de los terrenos por donde se va a construir no han querido llegar a un arreglo amigable con el Gobierno nacional.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

Ordenar al Fiscal del Circuito de Coclé que promueva el correspondiente juicio de expropiación de los lotes de terreno necesarios para efectuar el corte del canal del Río Grande, en la Provincia de Coclé, y que se describan en la preinserta nota del señor Secretario de Agricultura y Obras Públicas.

Esta Resolución se funda en los artículos 1467, 1468, 1469 y 1470 del Código Judicial.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

República de Panamá.—Corte Suprema de Justicia.—Presidencia.—Número 53.—Panamá, Septiembre 4 de 1926.

Señor

Secretario de Gobierno y Justicia,

Presente.

Señor:

Tengo el gusto de referirme a su atenta nota de fecha 2 del presente en que me pide una lista de las personas a quienes la Corte ha declarado idóneas para ejercer la abogacía, lista que acompaño, y a la vez me solicita mi opinión acerca de los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de la Ley 55 de 1924, por la cual se reglamenta el ejercicio de dicha profesión y de sus inconvenientes o defectos.

Cada día se hace sentir más en todos los países la tendencia a que el Estado reglamente la profesión de abogado así como lo hace con otras profesiones. Entre nosotros esa tendencia tomó cuerpo en la Ley citada en desarrollo del artículo 2o. del Acto Legislativo de 1918 reformativo de la Constitución y, por ser el primer paso que se ha dado en la materia, contiene, naturalmente, defectos o más bien vacíos fáciles de subsanar.

Se alega, en primer término, que la Ley 55, si bien es en extremo amplia tratándose de ciudadanos panameños, es demasiado severa respecto del elemento nuevo extranjero cuya aceptación en el foro nacional sería más bien conveniente.

No participo enteramente de esa opinión. No hay que olvidar el aspecto proteccionista de la Ley, aspecto que no constituye una novedad para las leyes que reglamentan las distintas profesiones en otros países ni es censurable si se piensa que no son los buenos profesionales, moral e intelectualmente, los que emigran de su país en busca de mejores perspectivas. Es indudable que hay casos excepcionales (que confirman la regla); pero tampoco puede negarse que es difícil, por decir lo menos, legislar para esos casos.

La amplitud de la Ley, por lo que respecta al elemento nacional, es hasta cierto punto excusable, pues que ella es, como se ha dicho, el primer paso que se da entre nosotros con el fin de reglamentar la abogacía. Con todo, ascienden a 38 los individuos a quienes la Corte, en acatamiento a la Ley, les ha negado el certificado de idoneidad para ejercer la profesión por no haber comprobado debidamente su idoneidad intelectual o su idoneidad moral o ninguna de las dos cosas. Y como sin ese certificado no se puede ejercer, dentro de poco sólo podrán obtenerlo los ciudadanos panameños que posean diploma de abogado, los extranjeros con diez o más años de residencia en el país que tengan también diploma, y los ciudadanos americanos que estén debidamente autori-

zados para ejercer en la Zona del Canal. Hay sin embargo, una puerta abierta, que debe cerrarse, y es que los Jueces Municipales y los Secretarios de los Juzgados se habilitan por el ejercicio de sus funciones, durante cierto tiempo, para ejercer hasta la Magistratura y, por consiguiente, para ejercer la abogacía, a pesar de que para ser nombrados no se requiere idoneidad especial ninguna. Y aquí me permito llamar la atención hacia la anomalía que presenta el Código Judicial, pues según sus artículos 57 y 111, cualquier individuo que ha desempeñado las funciones de Juez Municipal por diez años o de Secretario de éste, aunque sea del más modesto Municipio, puede ser Magistrado de la Corte y no Juez Superior ni de Circuito.

Argúyese también que al no permitir la Ley que nadie pueda gestionar en negocio propio, salvo en asuntos administrativos, (Art. 8o. de la Ley 52 de 1925, subrogatorio del 6o. de la Ley 55 de 1924), se atenta contra la Constitución que consagra como una de las garantías individuales el derecho de petición a las autoridades.

Tampoco me parece fundado ese parecer. Con la disposición legal citada no se coarta en realidad el derecho de petición de que se hace mérito sino que simplemente se REGLAMENTA SU EJERCICIO, cosa completamente distinta, y esto para los negocios judiciales, en los cuales no se trata, por regla general, de simples solicitudes como las dirigidas a las autoridades administrativas, sino de asuntos contenciosos, de índole completamente diferente, respecto de los cuales se hace necesaria una verdadera GESTION, con tramitación más o menos compleja, y se requieren, por tanto, conocimientos especiales por parte de quien gestiona. De modo que la reglamentación en estos casos redundará en beneficio de los mismos interesados o litigantes.

Algunos piensan que por lo menos no debe impedirse que los procesados puedan defenderse por sí mismos; pero me parece igualmente infundada esta opinión, desde luego que si en los negocios civiles están de por medio los intereses económicos, en los asuntos criminales lo está nada menos que la libertad individual. Cuántos ciudadanos no van a parar a las cárceles o purgan en ellas condenas excesivas por no haber sido defendidos correctamente!

Un nuevo argumento se opone todavía por los partidarios de la gestión irrestricta en los negocios propios y es que algunos no tienen con qué pagar un abogado que les atienda el caso.

En materia criminal el argumento no tiene fuerza desde luego que, como se sabe, para esas personas existen los DEFENSORES DE POBRES; pero hay que convenir en que, en materia civil, el problema no carece de interés, si bien es menos grave de lo que a primera vista parece, pues, aparte de que a los defensores de pobres puede conferírseles también la atribución de intervenir en asuntos civiles, no hay que perder de vista que, por lo general, sobre todo en asuntos de mayor cuantía, los pobres no figuran como demandantes ni como demandados. Pero precisamente, en asuntos de cuantía menor de cincuenta balboas cualquiera puede gestionar en negocio propio, de conformidad con el artículo 7o. de la Ley 55 mencionada.

Establece dicho artículo que no se consideran como asuntos propios las cesiones de créditos, y se objeta que esta disposición contraría el derecho de contratar, en especial, las disposiciones que en el Código Civil regulan el contrato de cesión de créditos. A mi juicio lo que el Legislador ha querido decir es, no que la cesión de un crédito no trasmite su dominio del cedente al cesionario sino que no se considera, para los efectos de la GESTION, como asunto

propio. Es decir, que no prohíbe la cesión; pero el cesionario no podrá gestionar personalmente si no es idóneo para ejercer la abogacía, aunque el asunto sea de cuantía menor de cincuenta balboas.

Téngase en cuenta, además, que si no fuera así se reabrirla la puerta para ejercer de hecho la abogacía a individuos que carecen de idoneidad intelectual y moral.

Para ejercer la profesión exige la Ley tanto la idoneidad intelectual como la moral. Y la Corte, interpretando el espíritu de la Ley, no se ha contentado con los certificados de los Jueces en que simplemente afirmen que el interesado ha ejercido la abogacía por tantos años, con buen crédito, sino que ha exigido que los Jueces especifiquen los negocios en que ha gestionado el solicitante y expliquen claramente la circunstancia del buen crédito.

Posteriormente, la Ley 52 de 1925, en su artículo 8o. ha exigido un requisito más: "dos declaraciones de abogados graduados que expongan sobre hechos pertinentes de los cuales pueda deducirse la competencia científica del abogado."

Sobre este particular existen dos opiniones en la Corte: la de que basta que los abogados graduados declaren que les consta, por el conocimiento que tengan de la actuación del solicitante, que éste posee la competencia científica, y la de que es preciso que los abogados se refieran en sus testimonios a **HECHOS CONCRETOS** de los cuales pueda deducirse dicha competencia. Conviene, pues, que en esto la Ley sea más explícita, así como en lo que se refiere a los certificados de los Jueces, a fin de evitar dudas más o menos fundadas, procurando, claro está, que la comprobación de la idoneidad moral e intelectual de los aspirantes para ejercer la abogacía se haga de la mejor manera posible.

Aunque no hago un estudio detallado de la Ley, por creerlo innecesario, espero que lo que dejo expuesto baste para satisfacer los deseos del señor Secretario.

Soy su muy atento y seguro servidor,

DAMASO A. CERVERA.
Presidente de la Corte.

LISTA

de las personas que de conformidad con la Ley 55 de 1924 han obtenido de la Corte Suprema de Justicia autorización para gestionar como Abogados ante todos los Tribunales de Justicia de la República.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Arjona Q. Augusto | Ballén Daniel |
| Amador Gustavo A. | Bieberach Carlos V. |
| Amado Juan J. | Best Ernest |
| Arjona Q. Julio | Boyd Jorge E. |
| Arosemena F. Florencio | Beleño José Manuel |
| Abrahams V. Enrique G. | Bieberach Carlos O. |
| Aizpuru Elías | Benítez Luis N. |
| Arias Harmodio | Barranco R. José W. |
| Arosemena Juan D. | Brandao Píndaro |
| Arosemena J. Tomás | Barahona Joaquín |
| Arjona Aristides | Bustos Wenceslao. |
| Aizpuru Antonio Papi | |
| Amador José. | Cajar y C. Manuel |

Carrión Juan B.
Correa G. Alfonso
Candanedo Ismael
Cervera Augusto A.
Conte B. Héctor
Conte Gregorio
Cajar Alejandro A.
Cozzarelli R. Francisco
Cortés Santos
Crespo Ramón L.
Carles Recaredo
Carrington Lloyd S.
Casís Hermógenes
Cruz D. Abelardo
Correa Mauricio M.
Cervera Dámaso A.

Chiari Eduardo
Chiari y G. Francisco

Dudak Juan J.
Du Bois Alfredo D.
Delgado J. Jacob
Delgado J. Nicolás
Donado Virgilio J.
Davis Everardo
Dutary J. Aquilino

Escalante C. Ernesto
Espino Lisandro
Esquivel Aníbal
Espino Justo P.
Escobar Felipe J.
Estrada G. José
Estrada Olegario
Echevers V. Humberto
Escobar Ramón.

Fábrega J. Isaac
Franceschi José
Filós Francisco Antonio
Fernández J. Isaac
Fábrega Julio J.
Ferrari Angelo
Flowers Jowel L.
Fernández Fernando
Fernández José María
Fairman Channcey
Fábrega Leopoldo E.

García F. Luis
Guardia Aurelio
Guardia Fernando
Grimaldo B. Miguel A.
Guevara Carlos
González Guill Honorio
Guardia José D.
González Clara
Gelonch Ignacio
Gutiérrez Manuel de J.
Grimas José Antonio
Garcerán Buenaventura
Grimaldo Manuel María
Goytía Víctor F.
González P. Juan de Dios

Henríquez Olegario
Herrera L. Manuel A.
Herrera E. Octavio
Huerta José María
Herrera G. Raúl.

Icaza A. Carlos
Illueca Juan J.
Iglesias Roberto T.
Icaza Alberto V. de
Isaza Ubaldino.

Jurado V. Rosendo
Joly Manuel S.
Jurado Q. Isaías
Jaramillo A. Ernesto
Jiménez Roberto
Jaén G. Manuel de J.
Jaén Antonio Ricaurte

Jaén P. Raúl E.

López y L. Jacinto
Lombardi Juan
López Orvaldo
Lavergne H. Enrique
Lasso C. Ricardo A.
López Víctor E.
Lindo J. Jesurún
López V. Pedro
Loy Simón K.

Martínez Narciso
Moreira Francisco F.

Miranda M. Julio
Meléndez V. Manuel
Martínez U. Aníbal
Mercado R. Julio
Morgan Eduardo
Moreno Correa. Pedro
Miró Gregorio
Mendoza Alberto
Morales Juan R.
Meléndez P. Pacífico
Márquez Bolívar
Martín V. Casimiro
Morales H. Luis
Melo Vicente O.
Medina Pedro A.
Morales H. Eduardo A.
Martínez Cirilo J.

Noriega Manuel Antonio
Návalo Zenón
Noli B. Ignacio
Núñez R. José María.

Ocaña F. Eligio
Ortega Américo.
Ponce Gil R.
Puy Alberto de
Puyol C. Auxibio
Picota G. Isidro
Pérez E. José de la C.
Pinilla Manuel S.
Patterson Jr. Guillermo
Patiño Heliodoro
Pérez R. Abraham T.
Pimentel P. Manuel María
Pohle Wililam R.
Pino R. Manuel
Pérez José Leonidas
Pérez Felipe O.
Purdon Louis K.
Porras Belisario.

Quintero A. Benjamín
Quirós y Q. José Manuel
Quintero Jr. Samuel
Quinzada Ignacio.

Rodríguez C. Alejandro
Robles David
Reyes T. Benito

Rosa José de la
Ruiz N. Anastasio
Rodríguez Aquileo
Rhodes Pedro N.
Ramos Alejandro
Ramírez Vicente H.
Rodríguez C. Felipe
Robles Adriano
Rivera S. Ricaurte

Sosa Ladislao
Silvera Didacio
Salazar Juan Manuel
Solís Galileo
Segundo Cristóbal L.
Segovia Eduardo R.
Soto José Domingo
Soberón Misael.
Tejada J. Magdaleno
Tapia Gil E.
Tejada U. Efraín
Tinker Juan Nicanor
Turner Domingo H.
Todd William C.
Talavera C. Miguel
Tejada Matías
Tapia E. Alejandro
Trujillo Liberato.

Ucrós Vicente
Urriola Cristóbal de
Ureta E. Ramón.
Vidal E. Pedro
Villarreal E. Venancio
Velarde Horacio
Valdés A. Leopoldo
Villalaz Nicanor
Vásquez G. Juan
Valdés Héctor
Valdés Julián
Vives Picón José María
Valdés Antonio Alberto
Villalaz Pedro N.
Vallarino Darío
Villarreal J. Daniel
Velásquez Pablo E.
Valdés Murillo Pedro.

L. SOSA.
Secretario.

Informes
de los Gobernadores
de Provincias

donde sea posible los gastos innecesarios en esta Sección a mi cargo, como por otra parte procurar crear fondos para el sostenimiento de la misma, me permito aconsejar como medida benéfica suprimir el mencionado empleo de Defensor de Oficio y restablecer el de Juez Ejecutor en esta Provincia, procurando que el nombrado sea persona competente, honrada y de carácter independiente.

En apoyo de mis razones está la lista de los Propietarios morosos, que tienen deudas con la Nación por fincas ubicadas en este pobre Darién, y la cual lista se puede consultar en la oficina del ramo de esa Capital; allí se puede apreciar a cuánto asciende el porcentaje que correspondería a esta Provincia de acuerdo con los cobros, si hubiera el mencionado Juez Ejecutor, con residencia y ejecución aquí en La Palma.

El Darién para su engrandecimiento necesita de todas sus rentas, que bien administradas demostrarán que ésta no es una región improductiva, carga pesada para el erario Nacional, sino al contrario, una tierra rica y fértil, que sólo ha tenido la mala suerte de que sus dirigentes, con raras excepciones, sólo se han preocupado por ostentar el título de Gobernantes y hacer alarde de poder, sin preocuparse por el adelanto y mejoramiento de los pueblos de su mando.

CONSEJO MUNICIPAL

El Consejo Municipal de este Distrito se reúne en casa propia construída con el trabajo personal subsidiario, siendo este el único edificio de propiedad Municipal en esta cabecera de Provincia. El edificio es techado de paja, forrado de cañas y piso de madera; está dotado de buenos muebles y bien ventilado.

En este Municipio desde muchos años atrás ha faltado administración eficiente y según se desprende de lo que he podido saber relacionado con el funcionamiento de corporaciones anteriores, la línea de conducta de los ediles en diferentes períodos es harto censurable y prueba de ellos es que el Municipio tiene deudas por la suma de B. 615.00 según paso a demostrar y que no se justifica por el motivo que durante todo ese lapso de tiempo las rentas Municipales que eran las mismas de hoy fueron cobradas con toda regularidad y no fueron invertidas en ninguna obra pública, pues no existe.

Cuentas que debe el Municipio de Chepigana

| | |
|--|-----------|
| Régulo Ibañez, como Juez Municipal, año de 1922 | E. 140.00 |
| Eustaquio Madrid, Secretario, año de 1922 | 140.00 |
| Marcelino Ramírez, Juez Municipal, año de 1924 | 80.00 |
| Nicolás Batista, Secretario, año de 1924 | 75.00 |
| Félix Cañizales E., Secretario, año de 1924 | 25.00 |
| Juan Vieta, Personero, año de 1923 | 40.00 |
| Juan Vieta " " " 1924 | 30.00 |
| Serafín Chávez A., Secretario del Concejo, año de 1924 . . | 33.00 |
| Pedro Marmolejo, Arrendamientos, año de 1924 | 52.00 |
| <hr/> | |
| B. 615.00 | |